



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE TUNJA

Tunja, diecisiete (17) de septiembre de dos mil veinte (2020)

Medio de control:	Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación:	15001 3333 004 2019 00170 00
Demandante:	Polidoro Cano Suárez
Demandado:	Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP

I. ASUNTO

Procede el Despacho a resolver la solicitud de llamamiento en garantía, presentada por la parte demandada contra la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia – UPTC.

II. ANTECEDENTES

1. La demanda

El señor Polidoro Cano Suárez promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la UGPP, con el fin de que se declare la nulidad de las Resoluciones Nos. 024272 de 16 de septiembre de 1999; 6512 de 26 de abril de 2000, PAP 045321 de 24 de marzo de 2011, PAP 054184 de 19 de mayo de 2011, RDP 039836 de 20 de octubre de 2017, RDP 045779 de 5 de diciembre de 2017 y RDP 048025 de 26 de diciembre de 2017, a través de las cuales se negó la reliquidación de una pensión. A título de restablecimiento del derecho, solicitó la reliquidación de su pensión, con la inclusión de los siguientes factores salariales: primas de navidad, de servicios y subsidio de transporte, devengados durante el último año de prestación de servicio.

2. La solicitud de llamamiento en garantía

La apoderada de la parte demandada llamó en garantía a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - UPTC, para lo cual indicó que el demandante prestó sus servicios a esa institución, y que la liquidación de la pensión se efectuó con base en los factores salariales sobre los cuales aportó el empleador.

Asimismo, señaló que el reconocimiento de la pensión dependía de los aportes a seguridad social por parte del empleador; por consiguiente, consideró que las actuaciones de la UPTC fueron fundamentales para la expedición de los actos cuya nulidad se pretende, por lo que en caso de una eventual condena se generaría un perjuicio económico injustificado a la UGPP.

Adicionalmente, sostuvo que la liquidación de la pensión se realizó únicamente con la inclusión de los factores efectivamente certificados y sobre los cuales se hicieron los descuentos, por lo que los nuevos factores solicitados debían ser reconocidos y pagados por la entidad empleadora.

Por tal razón, aseguró que la entidad empleadora tenía la obligación legal de pagar las sumas adeudadas por concepto de factores salariales, que en sentir del demandante, debieron tenerse en cuenta en la liquidación de su pensión.

III. CONSIDERACIONES

El artículo 225 del CPACA regula la figura del llamamiento en garantía, el cual consiste en solicitar la intervención de un tercero con el fin de garantizar la reparación de un perjuicio que pudiese llegar a sufrir con ocasión de una decisión judicial, o también con el objeto de obtener el reembolso de los dineros pagados que se derivan de una condena. No obstante, la norma exige para su procedencia la existencia de una relación legal o contractual entre quien llama en garantía y el llamado.

Frente a la existencia de la obligación legal de indemnización o de acudir al llamamiento, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que esta “***se refiere a la existencia de una norma que determine que en un momento dado, un tercero ajeno a la relación procesal trabada en el asunto de que se trate, deba entrar a responder por los actos o hechos que son objeto de cuestionamiento en el mismo; es decir, que debe existir una norma que imponga la obligación a cargo de éste, de resarcir un perjuicio o de efectuar un pago que pudiera ser impuesto en la sentencia que decida el respectivo proceso***¹ (Negrita fuera del texto)

De igual modo, la norma citada establece que el llamamiento en garantía con fines de repetición se regirá por las normas de la Ley 678 de 2001; por consiguiente, a la luz de lo dispuesto en el artículo 19 *ibídem*, la entidad pública perjudicada o el Ministerio Público pueden solicitar el llamamiento en garantía del agente frente al que aparezca prueba sumaria de su responsabilidad.

IV. CASO CONCRETO

La UGPP pretende que se vincule como llamado en garantía a la UPTC, por cuanto fue el empleador del demandante, para que en caso de que se profiera sentencia condenatoria, proceda a pagar los aportes sobre los factores base de liquidación.

Al respecto, el Despacho encuentra que no se cumplen los requisitos atrás señalados, en la medida que no se advierte la existencia de relación legal o contractual que permita llamar en garantía a la UPTC, a efecto de responder por la condena que eventualmente pueda producirse contra la administradora de pensiones, pues el derecho que se reclama del llamado en garantía no es el mismo respecto al cual se planteó la litis, comoquiera que la pretensión principal de restablecimiento de derecho es la condena a la reliquidación y pago de la pensión del demandante, así como el pago de las diferencias causadas en las mesadas pensionales, mientras que del llamado en garantía se reclama el giro de unos aportes.

Es del caso mencionar que el artículo 24 de la Ley 100 de 1993 estipuló como obligación de las entidades administradoras de pensiones adelantar las acciones de cobro con motivo del incumplimiento de las obligaciones del empleador, y que la liquidación mediante la cual la administradora determine el valor adeudado, prestará mérito ejecutivo, disposición reglamentada por el Decreto 2633 de 1994.

¹ Consejo de Estado- Sección Segunda – Subsección A, auto interlocutorio del 1 de agosto de 2016. C.P. William Hernández Gómez. Expediente núm. 4054-2014:

En consecuencia, de acontecer la condena la reliquidación de la prestación estaría en cabeza de la UGPP, por ser la entidad encargada de efectuar el reconocimiento y pago de la pensión del demandante, asistiéndole de igual manera la obligación de ejercer el cobro coactivo contra la UPTC, de conformidad con los mencionados preceptos jurídicos².

Esta postura ha sido expuesta por el Tribunal Administrativo de Boyacá para negar el llamamiento en garantía formulado contra empleadores, en casos similares al presente, al respecto, esa Corporación señaló lo siguiente:

“Así entonces, si lo que plantea la entidad llamante es que la llamada dejo de efectuar descuentos o cotizaciones para pensión a los que estaba obligada y, en consecuencia, debe ser condenada a su pago en este proceso, es claro que la obligación no emergería de la ley que se invoca y el proceso para su recuperación, si es del caso, sería la vía ejecutiva y no el restablecimiento del derecho.

(...)

En este caso, no es el aspecto probatorio lo que lleva a considerar que no procede el llamamiento en garantía sino razones diferentes, consistentes en el que el debate que plantea esta demanda solo permite definir el derecho o no al reconocimiento pensional que se demanda y no el deber de pago de aportes pensionales por parte de la llamada en garantía.

(...)

Es decir, ha sido uniforme y reiterado el criterio de este Tribunal, en concordancia con el del Consejo de Estado, que es improcedencia el llamamiento en garantía de las entidades para las cuales ha laborado quien demanda ante la entidad de seguridad social el reconocimiento pensional, dado que el tema en debate no es el pago de aportes por las entidades empleadoras, ni estas tienen deber alguno de responder por el derecho pensional en sí mismo”³

En otro pronunciamiento, relacionado con el mismo tema, la Corporación expresó:

“En conclusión, y teniendo en cuenta que la demanda se dirige a la obtención de la declaratoria de nulidad de los actos administrativos que omitieron la reliquidación de la pensión del demandante, tal decisión no podría vincular más que a la entidad que expidió dichos actos y no a las entidades con las que la accionante de la prestación social tuvo vínculo laboral, pues si bien es cierto lo afirmado por el llamante en cuanto al Instituto Nacional de Vías es el que debe realizar los aportes de pensión, también es cierto que a quien corresponde el reconocimiento y pago de las pensiones es a la UGPP y, no por ello se configura una relación legal o contractual que sustente la petición de llamamiento en garantía.”⁴

Así las cosas, como la figura del llamamiento en garantía se dirige a obtener “la reparación integral del perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia” (Art. 225 CPACA), en el

² A esta conclusión arribó el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en auto del diecinueve (19) de julio de dos mil dieciocho (2018), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, radicación 25000-23-42-000-2015-02145-01(4598-16), al resolver asunto se similares contornos al que nos ocupa.

³ Tribunal Administrativo de Boyacá, radicado N° 15238333300220160024901, providencia del 18 de julio de 2017, magistrada ponente: Dra. Clara Elisa Cifuentes Ortiz.

⁴ Tribunal Administrativo de Boyacá 25 de mayo de 2018, Expediente N° 15001-33-33-011-2017-00039-01, magistrado ponente: Dr. Luis Ernesto Arciniegas Triana

caso concreto no hay lugar a vincular a la entidad empleadora, al considerar que a su cargo no estuvo el reconocimiento y pago de la pensión en cuestión, sino únicamente el deber de efectuar los correspondientes aportes.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Tunja

RESUELVE

PRIMERO.- Negar el llamamiento en garantía de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - UPTC formulado por la entidad demandada, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO.- Reconocer personería a la abogada Laura Maritza Sandoval Briceño, identificada con C.C. N° 46.451.568 y T.P. N° 139667 del C. S. Jra., para actuar como apoderada judicial de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, según la escritura pública visible a folios 138 y siguientes del expediente.

TERCERO.- En firme esta providencia, ingresar el proceso al Despacho con el fin de continuar con la etapa procesal correspondiente.

Notifíquese⁵ y cúmplase

Firmado Por:

**ANGELA MARIA JOJOA VELASQUEZ
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 004 ADMINISTRATIVO DE TUNJA**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

7ad0e7b27a48b0cf87c849d60e3bfcdc945030bb78ce31fbd047633fabf48d88

Documento generado en 17/09/2020 11:23:13 a.m.

Juzgado Cuarto Administrativo de Oralidad
del Circuito de Tunja

NOTIFICACIÓN POR ESTADO

La anterior providencia se notifica por
estado electrónico N.º 28
de hoy 18 de septiembre de 2020, a las 8:00 a. m.

FERNEY MAURICIO DÍAZ HERNÁNDEZ
Secretario